

DINÁMICA DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN COLOMBIA

Dinámica de la confrontación armada en la
confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar
(ISBN: 958-18-0323-8)

Dinámica reciente de la confrontación armada
en el Catatumbo
(ISBN: 958-18-0321-1)

Dinámica reciente de la confrontación armada
en el Urabá antioqueño
(ISBN: 958-18-0324-6)

Dinámica reciente de la violencia en el norte del Valle
(ISBN: 958-18-0316-5)

Dinámica reciente de la confrontación armada en
Caldas
(ISBN: 958-18-0323-8)

Por:

Observatorio del programa presidencial de derechos
humanos y derecho internacional humanitario
Vicepresidencia de la República, 2006
Bogotá, D.C.

*Fecha de recepción: 30 de marzo de 2007
Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2007*

APROXIMACIÓN INICIAL

Los derechos humanos y los mecanismos implementados para su protección, se han convertido en la herramienta principal para evaluar el grado de desarrollo de los estados por parte de la comunidad internacional¹. De las medidas adoptadas por los países para asegurar su cumplimiento y el castigo eficaz a sus violadores depende en gran parte el grado de cooperación —principalmente en el campo social, económico, financiero y comercial— tanto de otros estados, como de diversos organismos internacionales. Colombia no ha sido una excepción a esta percepción acerca de la importancia de los derechos humanos y la preocupación gubernamental en esta área ha sido una constante en el último gobierno.

Con el fin de hacer diagnósticos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en 1999 fue creado el “Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario²”, el cual nace como un espacio creado por el Estado para el seguimiento del conflicto armado en el país y las violaciones a los derechos humanos. Su objeto ha sido la conformación de un sistema de información veraz, actualizado y completo de la delicada situación de derechos tales como la vida, la libertad y la integridad de los colombianos, para generar instrumentos orientados a la construcción de la convivencia armónica en el país. El observatorio se ha constituido en una herramienta fundamental, además, para la determinación de la política pública en materia de violaciones a los derechos humanos, de tal forma que sus informes deberían marcar el derrotero del gobierno en el manejo de estos problemas³.

-
- 1 Por ejemplo, cuando se habla de los estados fallidos, una de las características comunes que comparten es una sistemática violación a los derechos humanos.
 - 2 En adelante nos referiremos a él como el observatorio.
 - 3 El observatorio en desarrollo de sus funciones “vigila la conducta de los actores del conflicto y sus repercusiones sobre la población, haciendo un seguimiento de la gestión de las entidades del Estado encargadas de promover los derechos humanos.

En este texto pretendemos hacer una reflexión sobre cinco informes que el observatorio publicó a mediados del año 2006 analizando las dinámicas del conflicto armado y de las violaciones a los derechos humanos en cinco zonas diferentes: Santanderes y el sur del Cesar, Catatumbo, Urabá antioqueño, Norte del Valle y Caldas. Cabe anotar que en ninguno de los textos se habla de “conflicto armado” lo cual ha sido una posición del actual gobierno colombiano. Se habla de “la violencia” y de las “confrontaciones armadas”. Sin embargo, usaremos el término “conflicto armado” en forma genérica para describir las dinámicas violentas de estas zonas en donde diferentes actores se disputan el control territorial. Por otro lado, es necesario advertir que para el análisis de las regiones se toman fundamentalmente tres variables: violaciones de derechos humanos (homicidios, amenazas, masacres, secuestros), infracciones al derecho internacional humanitario y la intensidad de las confrontaciones. A continuación exploraremos estas variables para cada una de las regiones e intentaremos, después de revisar este diagnóstico, explorar algunas conclusiones que arroja la lectura bajo la perspectiva de que estos documentos deben ser un aporte a la solución del conflicto armado colombiano y la recurrente violación de los derechos humanos.

SANTANDERES Y SUR DEL CESAR

Según el observatorio esta zona del país es de gran importancia para los grupos armados irregulares ya que comunica al centro con el norte del país, es una zona fronteriza, y adicionalmente por esta región cruza uno de los oleoductos más importantes del país (Caño Limón – Coveñas). Esta zona geográfica, resulta de gran interés para el análisis de la confrontación armada del país, ya que,

Su labor está encaminada a la definición y promoción de políticas en el tema de derechos humanos, en ese sentido, está facultado para hacer recomendaciones para orientar dichas políticas”. Al respecto véase <http://www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=observatorio>.

“constituyó un punto de convergencia entre dos bloques de las autodefensas, el bloque Norte (BN) y el bloque Central Bolívar (BCB), ambos recién desmovilizados” —y— “encierra diferentes escenarios en lo que atañe a las dinámicas entre autodefensas y guerrilla”⁴.

En lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, el observatorio hace una división temporal, en tres fases. La primera fase, comprendida entre 1990 y 1996, es un momento en el cual las tasas de homicidio tienden a subir, las tasas de confrontación muestran una tendencia a la baja y los niveles de secuestros son inferiores a los registrados en otros periodos anteriores. Ello se explica gracias al incremento de homicidios por parte de grupos de autodefensas poco articulados entre sí y la disminución de ataques y secuestros por parte de la guerrilla. En la segunda fase, que se extiende entre 1997 y 2002, las autodefensas se consolidaron y los niveles de homicidio permanecieron elevados, mientras que la confrontación se mantuvo baja y los secuestros se incrementaron. La tercera fase, de 2003 a 2005, presenta unas importantes peculiaridades; para esta época se implantaron las conversaciones de paz entre el gobierno y las autodefensas y las fricciones entre el BN y el BCB de las autodefensas aumentaron. No obstante lo anterior, los índices de homicidios y secuestros disminuyeron.

Aparte de la presencia de grupos de autodefensa, el ELN es el grupo armado irregular de mayor tradición en la región y que se consolidó a partir de la segunda parte de la década de los años sesenta y su accionar giraba en torno a la economía petrolera, las extorsiones y secuestros. De igual forma, las FARC iniciaron su presencia en los años ochenta aunque su presencia se consolidó con la economía de la coca en la década de los noventa. Las autodefensas, por su parte, tienen como origen en la región la presión de la guerrilla sobre los sectores productivos y la conformación de sindicatos, por parte de los trabajadores de las plantaciones de palma africana y las

4 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los Santanderes y el Sur del Cesar*, Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2006.

explotaciones petroleras; es decir nacieron con el objetivo de desarticular los movimientos guerrilleros y sindicales. Así, el asesinato de sindicalistas ha sido una constante en la región.

Actualmente, en la zona plana de esta región, la influencia de la guerrilla es casi inexistente, pero no es así en la zona intermedia de cordillera, en la cual ha existido una constante disputa entre la guerrilla y las autodefensas por los cultivos ilícitos. En la zona intermedia los homicidios en las dos primeras fases se incrementaron, sin embargo en la tercera fase se presentó una disminución importante, en esta zona es donde más se reflejaron las fricciones entre los dos bloques principales de las autodefensas, y se denunciaron numerosas irregularidades en la elecciones, lo que generaron cambios en el poder local entre 1992 y 2000; adicionalmente es de gran preocupación para el gobierno los signos de reactivación de la guerrilla que se han presentado. Por su parte, en la zona de cordillera se han presenciado reclutamientos y extorsión a comerciantes por parte del grupo de las Águilas Negras, además de amplias restricciones de libertad de movilización a las comunidades indígenas y la presencia permanente de la guerrilla en las zonas rurales más apartadas.

En general, la confluencia de los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander, se ha visto afectado recientemente en gran medida por la presencia de diversos grupos armados irregulares, y se ha visto afectado principalmente por: la disputa entre guerrilla y autodefensas de la zona intermedia y cordillera, las fricciones entre los dos bloques de las AUC, la lucha de la guerrilla por recobrar espacios geográficos tras desmovilización de las autodefensas, presencia de nuevos grupos de Águilas Negras y persistencia del narcotráfico; lo que proporciona una pauta de lo que será la dinámica futura del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos en la región.

CATATUMBO

Otra zona en la que el observatorio centra sus estudios es la región del Catatumbo, la cual se encuentra ubicada al norte del país, y está

conformada por los municipios que están bañados por el río que recibe el mismo nombre. Los individuos que habitan esta zona se han dedicado principalmente a la explotación de productos agrícolas, minerales y petróleo. Esta región se dividió para efectos del informe en tres zonas, la plana —conformada por poblaciones ubicadas en terrenos planos y abiertos—, la intermedia —conformada por poblaciones ubicadas en terrenos abiertos y montañosos— y la cordillera —conformada por poblaciones ubicadas en terrenos montañosos—. La presencia de grupos al margen de la ley, ha estado latente en este territorio desde los años sesenta, sobre todo con una fuerte presencia en sus inicios del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el propósito inicial del ELN era:

“acercarse a la frontera con Venezuela y crear un corredor de comunicación con Arauca, con las que se generaron su posterior expansión alrededor del oleoducto”⁵

de Caño Limón - Coveñas; para poder llevar a cabo este objetivo, el grupo subversivo, resistió la intromisión de la fuerza pública y de las organizaciones paramilitares en estas zonas. Esta organización tuvo su mayor auge en los años ochenta y comenzó a perder su predominio en el año 2000 como consecuencia de incursiones en estos territorios realizadas por las FARC y las autodefensas.

Las FARC llegaron a esta región en 1982, su objetivo era:

“utilizar al Norte de Santander como uno de los puntos culminantes para el dominio de la cordillera oriental y de esta manera comunicar al Ecuador con Venezuela, a través de la creación de una cadena de frentes”⁶.

Su expansión y fortalecimiento se relacionó directamente con el esparcimiento de los cultivos ilícitos, lo cual llevó a que se

5 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo*. Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2006, pág. 13.

6 *Ibidem*, pág. 15.

presentaran conflictos por la producción y comercialización de estos cultivos entre las autodefensas y este grupo guerrillero.

Las autodefensas aparecieron en esta zona a finales de los años ochenta y ejecutaron pocos hechos violentos hasta finales de los años noventa, la mayor parte de estos acontecimientos se presentaron en la frontera con el sur del Cesar; en este lapso temporal se presentó una importante alianza entre estas organizaciones, que fue la unión que se dio entre el grupo de las autodefensas del norte con el grupo de las autodefensas del sur del Cesar, como resultado de ello se creó el Bloque del Catatumbo (BC), que se acentuó principalmente en la zona plana —zona que se encontraba bajo el poder de las FARC—; en la medida en que este grupo se fue expandiendo por las diferentes zonas, se empezó a percibir un importante debilitamiento de las milicias que conformaban el frente de las FARC. La fuerte presencia de este tipo de organizaciones se mantuvo hasta el 2004 cuando se dio la desmovilización del BC, el cual para ese entonces había logrado el dominio de la zona plana, pero este acontecimiento no implicó la total desaparición de los movimientos paramilitares, ya que su presencia se siguió manteniendo de forma latente en la zona de la cordillera, y al mismo tiempo se dio el surgimiento de un grupo al margen de la ley denominado “las Águilas Negras”, el cual, se encontraba conformado por integrantes de los grupos paramilitares que no se habían acogido al programa de desmovilización.

El observatorio en este informe al exponer los índices de acciones violentas a mano de grupos al margen de la ley, que se presentaron en esta zona, los divide en cuatro periodos, el primero de ellos se da de 1986-1998 —tiempo en el cual se encontraba el dominio de estas tierras en manos del ELN— en donde el índice de homicidios, secuestros y desplazamientos fue elevado; el segundo se da durante 1999 y 2002 —época marcada por la incursión de grupos paramilitares— en el cual se incrementó de una manera significativa la tasa de homicidio, secuestro y desplazamiento; el tercero se ubica en los años de 2003-2004 —periodo en el que se empiezan a desarrollar la política de defensa y seguridad democrática por parte del Estado— se presenta una baja en el índice de homicidios y en el

de secuestros; y el cuarto y último periodo se da en el 2005 — época en la que se dio la desmovilización del BC— aquí se mostró una baja en los índices de homicidios, y se presentó un alce en la incursión de ataques bajo mandos subversivos sobre todo a los bienes civiles.

Es importante señalar el surgimiento del grupo de las Águilas Negras poco tiempo después de la desmovilización, compuesto por individuos que pertenecían a grupos paramilitares, los cuales se conformaron con el propósito de seguir vigilando los negocios ilícitos que este grupo adelantaba antes de su desmovilización. También es importante resaltar el resurgimiento de los grupos subversivos en la zona del Catatumbo como consecuencia de la desmovilización de los grupos paramilitares.

URABÁ ANTIOQUEÑO

De igual manera que en la zona del Catatumbo y el sur del Cesar, el observatorio centra sus investigaciones en otra zona que refleja la dinámica del conflicto en Colombia, que es el caso del Urabá antioqueño. La región del Urabá, desde los años sesenta se ha distinguido por el incremento de inversiones por parte de diversos empresarios y como consecuencia directa de ello, en las siguientes décadas, se han presentando:

“diversos conflictos sociales y económicos que han involucrado sindicatos, partidos políticos, sectores agrarios, latifundistas y empresarios del campo; además el surgimiento de estructuras armadas subversivas y antisubversivas, que han canalizado las tensiones existentes para provocar disputas y generar alianzas, bajo el influjo creciente del narcotráfico”.

Los grupos al margen de la ley han tenido siempre una predilección sobre este territorio, dada su ubicación geográfica estratégica

7 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño*, Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2006, pág. 7.

—con diversidad de montañas y zonas selváticas—, la existencia de cultivos de tipo exportación como el banano, pero sobre todo por la existencia de un puerto sin una presencia importante por parte de la fuerza pública, que permite la entrada y salida de productos sin una inspección adecuada. Es por ello que en las últimas décadas esta región ha sido uno de los lugares en donde se han presentado gran número hechos violentos, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes, generando el desplazamiento permanente de los habitantes de la zona.

El grupo armado que tuvo más auge durante los años setenta fue el EPL, adjudicándose un gran número de asesinatos de dirigentes sindicales, secuestros y ataques a la población civil, acciones que contrarrestó la fuerza pública por medio de enfrentamientos armados contra estas milicias. Ello trajo un debilitamiento gradual del grupo y por esta razón terminaron firmando un tratado de paz con el gobierno en 1991 durante el mandato de CÉSAR GAVIRIA. En los ochenta fue relevante la presencia de las FARC, produciendo ataques en contra de reinsertados, líderes de grupos políticos, simpatizantes de estos grupos y sindicalistas, naciendo de esta manera una lucha incesante por la obtención del poder político; estas acciones violentas se prolongaron durante los años noventa y principios del siglo XXI.

Al mismo tiempo que los grupos subversivos empezaron a sentirse con fuerza en esta parte del territorio nacional, se iba dando la conformación de grupos paramilitares apoyados por los empresarios de la región que más adelante se convirtieron en el denominado Bloque Bananero (BB), creados con el fin de lograr la recuperación del orden social alterado por las milicias de la guerrilla; en el desarrollo de este objetivo llevaron a cabo diversas masacres y secuestros hasta 1992, momento en el cual se dio una desmovilización parcial de algunos de los grupos de las autodefensas con motivo de las negociaciones que el EPL para ese entonces había adelantado con el gobierno. En 1994 estas organizaciones volvieron a incrementar su fuerza al incursionar en el eje ganadero de esta región y más adelante arremetieron contra el eje bananero logrando disminuir la presencia de las milicias de las FARC. Las masacres, asesinatos, desaparecidos y desplazados se dio al alza, el dominio que lograron alcanzar

sobre esta parte del territorio, les proporcionó la oportunidad ideal para fortalecer sus negocios de narcotráfico; a finales de 1998 las FARC emprendieron una arremetida contra estas organizaciones, permitiéndoles así recuperar gran parte del dominio territorial del Urabá.

La desmovilización de los grupos paramilitares llevó a un incremento más alto de desplazamiento en la zona del Urabá antioqueño, como producto del temor de los habitantes de esta región a una arremetida de ataques a mano de los grupos subversivos, ya que, de una u otra forma, las organizaciones paramilitares lograban mantener de cierta manera el orden social de la zona, de conformidad con el observatorio.

NORTE DEL VALLE

Otra zona que revisa el observatorio es la del norte del Valle, en la cual la presencia de conflictos entre grupos subversivos y organizaciones paramilitares no es muy frecuente, pero que debido a la alta presencia de agrupaciones de narcotraficantes en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, refleja de igual manera la dinámica del conflicto en Colombia.

Debido a la débil presencia estatal desde mediados del siglo XIX en el comienzo de las colonizaciones en el norte del Valle, siempre se ha presentado la existencia de agentes civiles que cumplen un papel de regulación social, que se fundamentan en el uso de violencia como medio para resolver los conflictos y ejercer determinado control sobre el territorio y la población. El grupo de colonos al principio se dedicaron a la explotación de productos agrícolas, más adelante en la primera mitad del siglo XX fueron tomando fuerza en los partidos políticos, y se presentaron hechos violentos entre los seguidores del partido conservador y el partido liberal, con fines a reducir el número de participantes de cada esfera política. En la segunda mitad del siglo XX, debido a que las organizaciones de narcotraficantes tenían estrechas relaciones con algunos sectores políticos, un enorme poder económico y grupos armados especializados entraron a ejercer la regulación social en esta parte del territorio nacional. Sobre este

punto el observatorio es enfático en culpar a las mafias por los altos índices de violencia:

“Uno de los factores determinantes en la consolidación del narcotráfico en el departamento del Valle, fue el alto grado de penetración logrado por las mafias de la coca en las estructuras sociales, económicas y políticas del departamento, principalmente a través de prácticas como el chantaje, la compra de votos y la corrupción en general, así como un fuerte control territorial a través del uso de la violencia y el terror”⁸.

A pesar de la presencia notoria de organizaciones de narcotraficantes, es importante señalar la poca presencia de grupos subversivos en esta parte del territorio. La implementación de la violencia por el control y la competencia del narcotráfico, arrojó altos índices de homicidios entre los años de 1992 y 1995. Recientemente, de la misma forma, se han presentado alianzas entre los grupos del narcotráfico, paramilitares y la guerrilla, que han permitido a los capos establecerse en zonas de refugio, y de esta manera tratar de entorpecer los mecanismos que se han implantado en el Gobierno de URIBE para que se presente la recuperación de la zona.

CALDAS

Respecto a otra zona del país, el departamento de Caldas, el observatorio destaca cómo el negocio del narcotráfico y la disputa por el control del poder, son el origen de las acciones violentas contra los líderes locales, las comunidades indígenas y la población civil en general. El aumento de la violencia, es atribuida en gran medida a la ruptura del acuerdo mundial cafetero a finales de los años ochenta; sin embargo, la dinámica y expresiones de la confrontación en Caldas, difiere de las distintas regiones, ya que se ve influenciada por el desarrollo de las acciones violentas de los departamentos vecinos

8 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. *Dinámica reciente de la violencia en el norte del Valle*. Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2006, pág. 7.

de Antioquia, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca⁹. Es decir que pesan igualmente las acciones que se hacen en otros departamentos.

El pico de violencia, se registró en el año 2002, como resultado de la ruptura de la zona de distensión, y posteriormente en el 2003 con el inicio de la política de defensa y seguridad democrática. Por otro lado, las comunidades indígenas y los grupos afrocolombianos de la región han sido afectados enormemente por las disputas entre las autodefensas y la guerrilla y las diversas tácticas empleadas por los grupos armados irregulares para evitar la fumigación y erradicación de los cultivos ilícitos, especialmente en el occidente de Caldas.

El informe del observatorio, arroja como resultado que la política de seguridad democrática en el departamento de Caldas ha producido resultados positivos, ya que se han reducido los secuestros, e igualmente se ha disminuido la capacidad de las FARC, incrementando en forma significativa la presencia de la Fuerza Pública. No obstante estos avances, el observatorio de DDHH advierte sobre el peso del negocio del narcotráfico en la dinámica local de la violencia y cómo algunas estructuras de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, desmovilizadas en febrero de 2006, siguen presentes en algunas zonas planas del oriente del departamento¹⁰.

CONCLUSIONES

Estos informes sobre la situación de derechos humanos que publica la Presidencia de la República parecen obedecer a una preocupación creciente por tomar acciones en torno a las violaciones de normas de derecho internacional por cuenta del conflicto armado colombiano.

9 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. *Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas*. Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2006.

10 *Ibíd.*

De estos informes quisiéramos resaltar dos cosas de las cuales se dará cuenta el lector:

1. En el informe no hay un reporte de las vías jurídicas que se pueden haber seguido para la solución de las violaciones de los DDHH. Es decir, no hay un rastreo o una respuesta de los organismos judiciales del Estado, por ejemplo, de qué se ha hecho para remediar la situación. El informe está enfocado a mostrar que en las regiones el índice de crímenes asociados con violaciones de DDHH se ha disminuido gracias a la presencia del Estado.
2. El hecho de que se presente la existencia de una dinámica regional diferenciada del conflicto armado arroja una importante cuestión a la manera como se han conducido las negociaciones de paz o, en general, las estrategias sobre el conflicto armado. Si bien en todas las regiones el narcotráfico parece ser una constante, algunas dinámicas productivas y étnicas han tenido influencia en la forma como se han dado los conflictos.

En cuanto a la primera cuestión que se resalta es importante criticar el hecho de que los derechos humanos sigan siendo vistos ligados al incremento de las políticas de seguridad. El cumplimiento de los mismos debe ser una cuestión que esté desligadas a las políticas de seguridad; es claro que puede ser necesaria una política como la del actual gobierno colombiano para combatir a la subversión. Pero es igualmente claro que el cumplimiento de los derechos humanos no se da con el establecimiento de esta política como al parecer lo pretende hacer ver el observatorio. De allí que estos informes sean importantes para el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente porque brilla por su ausencia. Son informes de un observatorio encargado del monitoreo de la situación de los derechos humanos, pero aparentemente el derecho está muy lejos de sus aproximaciones. Queda la pregunta de si la dimensión normativa del derecho tenga algo que aportar al mejoramiento de la situación

de estas regiones y no solamente el aumento de la presencia de la Fuerza Pública.

En cuanto a la segunda cuestión que hemos resaltado, la conclusión es sumamente importante en la medida en que tradicionalmente el conflicto armado en Colombia ha intentado resolverse desde perspectivas nacionales. Ello implica que el ejecutivo central es el que se encarga de las políticas de diálogo desde una óptica más central y no es claro el papel que juegan las regiones en esa determinación. Las dinámicas del conflicto armado parecen estar diferenciadas por regiones y si ello es preciso, los orígenes del mismo pueden ser distintos. Si bien el origen del conflicto no tiene una sola causa sino múltiples, lo que parecen compartir todas las regiones son el narcotráfico. Sin embargo los conflictos étnicos parecen estar en algunas regiones y en otras la interacción con multinacionales extranjeras. Si se pudieran establecer las cuestiones particulares del conflicto en cada región y la política de negociación empezara a desarticular la insurgencia a través de diálogos regionales, las posibilidades de una solución pacífica institucional al conflicto armado parecen más cercanas. Es por ello que estos informes parecen dar una luz en este sentido y un panorama que ojalá sea explorado por el Estado.

JORGE GONZÁLEZ JÁCOME*
LORENA URREA PEÑARANDA* *
MARTA ROMERO OROZCO* **

* Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Centro de Estudio en Derecho Internacional Francisco Suárez, S.J.

** Estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

*** Estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.